

PARO NACIONAL EN ECUADOR

Resistencia al neoliberalismo se fortalece

ECUADOR—La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) logró del gobierno de Ecuador una pequeña reducción del precio de combustible y una promesa de frenar el desarrollo de nuevos proyectos extractivos. Las manifestaciones surgieron en la mayoría de las provincias de Ecuador el 13 de junio y continuaron hasta el 30 de junio, cuando el gobierno firmó un acuerdo con la CONAIE.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana funcionó como un mediador entre el gobierno y la CONAIE. Y se mantendrá en este papel con una mesa técnica para monitorear la implementación del acuerdo con el gobierno.

Sin embargo, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza Salazar, dijo que una falta de implementación dentro de 90 días de la firma del acuerdo llevaría a una nueva movilización nacional a finales de septiembre.

Las manifestaciones lideradas por la organización indígena se iniciaron el 13 de junio 2022. Rápidamente, organizaciones civiles y estudiantiles se unieron al movimiento indígena, respaldando sus demandas.

La CONAIE entregó una lista de 10 demandas al gobierno, incluyendo:

- un congelamiento de los precios de diesel y gasolina regular,
- una moratoria de deudas y condonación a las deudas para los pequeños y medianos productores,
- precios justos para los productos vinculados a no firmar tratados de libre comercio,
- el derecho de sindicalizarse y respeto a los derechos de todos los trabajadores,



Caricatura por Vilma Vargas, Instagram @vilmatracas

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso encarcela al líder indígena Leonidas Iza Salazar pero ignora a los verdaderos criminales.

- un fin a la ampliación de “la frontera minera” y la industria extractiva junto con la preservación de los bosques y el agua,
- respeto a los 21 derechos colectivos de los pueblos indígenas en Ecuador, y
- un alto a la privatización “del patrimonio ecuatoriano” como las presas hidroeléctricas, carreteras, bancos y el sistema de salud. Otras demandas incluyen políticas de precios que ponen un fin a la especulación de los precios de comida y otros productos de primera necesidad, una garantía al acceso para todos los ecuatorianos a la educación superior y una inversión en la infraestructura de las escuelas, colegios, y universidades,

continúa en la página 4



Solidaridad

*La Voz del Sindicalismo
industrial revolucionario*

**Organización
Educación
Emancipación**

Una revista oficial de los Trabajadores
Industriales del Mundo (TIM)

IWW General Headquarters
1619-21 W. Belmont Ave.
Chicago, IL 60657, USA
Correo: PO Box 577893,
Chicago, IL 60657, USA
Tel. (773) 270-0284
ghq@iww.org www.iww.org/es

Secretaria-Tesorerera General:
Kelsey Tanabe Walker

Consejo general ejecutivo:
Gabby Gloria Bray, J. Cameron
Mancini, Brianna Peril, John
Hollingsworth, Shannen Maas, Kris
Cummings, Philippe Beliveau

Editor: Peter Moore
solidaridad@iww.org
www.iwwsolidaridad.org

Colaboradores: Colin Morrin,
Cooloud, Vilma Vargas.

El contenido no refleja la posición
oficial de los TIM.

¿Qué es los TIM?

Los Trabajadores Industriales del Mundo (TIM, conocido en inglés como los Industrial Workers of the World [IWW] o como los “Wobblies”), es una organización laboral democrática, compuesta por obreros de fila dedicada a estimular el poder obrero en los centros de trabajo.

¿Quién dirige el sindicato?

Somos un sindicato de base, liderado por sus miembros mismos quienes logran los resultados. Los TIM está dirigida por sus miembros, no por un conjunto de empleados a sueldo ni por patrones laborales.

Todos los oficiales en general son electos cada año por toda la membresía. No hay “oficiales de carrera” en los TIM. Cada rama local elige sus propios oficiales y tienen control completo sobre los asuntos de su local, después que cumpla con la constitución del sindicato. Nadie más puede decirles a los miembros que estén en sus trabajos, que se vayan a la huelga, que terminen una huelga, o que tomen cualquier otra acción laboral.

¿Cuáles son las tácticas del sindicato?

¡LA ACCIÓN DIRECTA DA RESULTADO!

Los TIM actúan con la solidaridad como principio primo. La solidaridad nos da el poder para que los obreros se mantengan unidos, para ganar las demandas.

No dependemos de contratos, de agencias gubernamentales, de levas o de las cortes, aunque a veces las usamos como recurso. Nuestro lema es “el que hiere a uno, hiere a todos.” Si un obrero es tratado injustamente, o forzado a hacer tareas peligrosas, o estafado en su salario, eso afecta todos los compañeros de trabajo, y éstos tienen que tomar acción para que pare este abuso. En los TIM no le mendigamos al patrón, ni le pedimos a los burócratas gubernamentales que resuelvan nuestros problemas. Juntos somos lo suficientemente poderosos para obtener lo que queramos a través de la acción directa—el uso de nuestro poder económico para ganar las demandas.

Tu patrón está organizado ¿porqué tú no?

Trabajas para una empresa—una organización de patrones. Los patrones usan su poder económico para enriquecerse de tu trabajo, y para obligarte a seguir sus órdenes. Ellos alegan de que siguen una política de puerta abierta, pero si tratas de luchar solo te darás cuenta de que la puerta abierta dice “SALIDA”.

En nuestro sindicato, tú y tus compañeros de trabajo pueden aguantar los golpes del patrón, con tu propio poder organizado para ganar mejores salarios, mejores horas de trabajo, condiciones laborales más seguras, y más que todo RESPETO Y DIGNIDAD EN EL TRABAJO.

Los organizadores de nuestro sindicato están en la calle contigo, trabajando para ayudarte y organizarte. ¡Pídele a uno de ellos la aplicación de admisión a los TIM hoy mismo!



Jefe va a la cárcel por casi 23 años

Ayudo planificar el asesinato de Berta Cáceres

HONDURAS—Uno de los autores del asesinato de la ambientalista hondureña, Berta Cáceres, fue condenado a 22 años de cárcel el 21 de junio de 2022. El entonces presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), Roberto David Castillo Mejía, ordenó el asesinato, según la corte hondureña.

Cáceres se opuso al proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca” de DESA por sus daños ambientales y movilizó a la comunidad contra su desarrollo como cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Castillo es el octavo responsable condenado por las cortes hondureñas. Sin embargo, el COPINH denunció al gobierno por no enjuiciar a los autores intelectuales del asesinato.

“Hasta el momento el Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla y en específico de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida no han realizado ni un solo avance real en esclarecer la autoría intelectual en este caso. Exigimos que se cumpla con el deber del Ministerio Público de enjuiciar a los autores intelectuales,” dijo el COPINH en su comunicado 13.

“Esta autoría intelectual está compuesta por los hermanos Jacobo, José Eduardo, y Pedro Atala Zablah y por Daniel Atala Midence.”

La familia Atala son banqueros y empresarios poderosos en Honduras.

Según el reportaje de The Intercept, los documentos financieros señalan que una transferencia de US\$1.7 millones fue enviada de Atala hasta Concretos del Caribe S.A. Durante las 48 horas en que se efectuó la transferencia, Cáceres fue ultimada en su casa en La Esperanza, Honduras, el 3 de marzo de 2016.

Un ambientalista mexicano también fue herido, al recibir un disparo; pero sobrevivió.

El año anterior a su asesinato, Cáceres había recibido el Premio Medioambiental Goldman por su resistencia y liderazgo contra el desarrollo de proyectos que atentan contra el medio ambiente y las necesidades de los pueblos Indígenas en



Foto: cooloud, www.flickr.com/photos/cooloud/

Berta Cáceres afuera de las oficinas del COPINH en La Esperanza, Intibucá, Honduras. La fotografía fue tomada el 3 de marzo 2015, 13 meses antes de su asesinato.

Honduras. El premio le dió un perfil internacional a Cáceres y su asesinato fue condenado a nivel mundial. Esto forzó al gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández a encontrar a los asesinos.

COPINH sigue luchando para conseguir el respeto para los derechos de los pueblos Indígenas Lenca. El 27 de junio la organización presentó sus demandas a la Presidenta Xiomara Castro de Honduras, quien asumió la presidencia en enero de 2022. Exige “la toma de medidas inmediatas para la eliminación de conflictividades territoriales y de disminución de la desigualdad y la pobreza del pueblo Lenca”.

También demandó “el compromiso del reconocimiento del Estado de Honduras de los derechos a la tierra, territorios y derechos de las comunidades indígenas... para la protección integral de derechos de pueblos indígenas.”



Paro en Ecuador

viene de la página 1

que el sistema de educación sea inclusivo e intercultural, y un abastecimiento al sistema de salud en cuanto a medicinas y personal en los hospitales. También demandaron terminar con la violencia criminal de los narcotraficantes y el crimen organizado en Ecuador.

“Es importante señalar que la plataforma de lucha propuesta por la CONAIE tiene visiblemente un carácter nacional, pues abarca demandas sentidas de toda la población ecuatoriana,” dijo Inti Cartuche V., un investigador y militante indígena Kichwa ecuatoriano, en un ensayo analítico sobre el paro nacional que se publicó en Indymedia Argentina.

“Estos levantamientos han tocado una de las fibras más persistentes del país, me refiero al colonialismo y el racismo de las clases dominantes.”

La respuesta inicial del gobierno ecuatoriano fue la represión, con el despliegue de la policía de motines, gas lacrimógeno y la fuerza física. Durante los 18 días del paro nacional, murieron al menos 6 personas y hasta 500 personas fueron heridas, según BBC Mundo.

Al principio del paro nacional, la Policía Nacional con apoyo militar desapareció al presidente del CONAIE, Leonidas Iza Salazar, el 14 de junio por casi 15 horas. Un juez declaró su detención legal y los fiscales del gobierno avanzaron un proceso penal contra él por su papel en organizar las manifestaciones.

En una denuncia publicada el 22 de junio, el CONAIE enfatizó que el arresto de su presidente era “un claro ejemplo de criminalización y de intento de aplastar el ejercicio del derecho universal a la protesta social encarnado en el líder del Movimiento Indígena.”

A pesar de firmar un acuerdo con la CONAIE, el gobierno sigue con el proceso legal en contra de Leonidas Iza Salazar.

Sin embargo, el 4 de julio, el caso en su contra fue declarado fallido y él continúa en libertad. El gobierno ya tiene que decidir si quiere intentar procesarlo de nuevo, si la Corte Constitucional

“Estos levantamientos han tocado una de las fibras más persistentes del país, me refiero al colonialismo y el racismo de las clases dominantes.”

—Inti Cartuche V.

resuelve que procede.

El gobierno ecuatoriano está encabezado por el nuevo presidente Guillermo Lasso, que era anteriormente un banquero. Su coalición derechista ganó las elecciones el 12 de abril de 2021 por un pequeño margen.

A pesar de la suspensión del paro nacional, el gobierno ha iniciado otra estrategia para desacreditar a la CONAIE y su liderazgo. En una entrevista de televisión con Infobae de Argentina, el presidente de Ecuador acusó al movimiento indígena de estar respaldado y financiado por narcotraficantes, con el apoyo del expresidente Rafael Correa. Hasta ahora, no se ha demostrado que exista alguna evidencia concreta para apoyar esta acusación. Además, controlar el crimen organizado y el poder de los narcotraficantes era una de las demandas claves del mismo paro nacional.

“Como vicepresidenta, de la CONAIE, como mujer, rechazamos rotundamente las declaraciones de Guillermo Lasso desde su total desconocimiento sobre los pueblos y nacionalidades y la historia de Ecuador. Estamos predispuestos al diálogo, pero jamás estaremos de rodillas,” dijo Zenaida Yasacama, la vicepresidenta de la CONAIE quien respondió en entrevistas y en Twitter.

La CONAIE denunció en Twitter: “El Estado ecuatoriano estigmatiza y criminaliza a los guardias indígenas generando graves riesgos a su integridad y a la de quienes brindan acompañamiento técnico.”



Trabajadoras de Call to Safety exigen un aumento

por Colin Morrin

EEUU—Las trabajadoras de la agencia sin fines de lucro, Call to Safety, en Portland, Oregón han reunido al sindicato de los Trabajadores Industriales del Mundo. Call to Safety opera una línea telefónica directa para gente que se encuentra en un estado de crisis y necesita apoyo.

Últimamente, las trabajadoras han estado exigiendo un salario digno que aumente cada año. Sus esfuerzos parecen estar dando resultados durante la última ronda de negociaciones con los dirigentes de la agencia.

El comité de finanzas de Call to Safety y la directora ejecutiva ya aprobaron el aumento anual. La propuesta ya se va a la junta directiva de la organización para un voto a finales de este mes.

“Pedimos que se aplique un aumento de 3 por ciento de inmediato, y que se agregue un aumento anual al contrato en el futuro,” dijo Julianna Smith, una trabajadora de Call to Safety y miembro del sindicato.

El sindicato de las trabajadoras de Call to Safety

comenzó a organizarse en 2003 para empoderar a las trabajadoras de tiempo completo y de medio tiempo. Las trabajadoras ganaron su primer contrato sindical el año siguiente. Desde entonces, los miembros han estado aumentando la fuerza y capacidad de su sindicato.

Recientemente, el sindicato de Call to Safety fue catalizado por la formación de un comité de organización del sindicato que se fundó en 2019 para avanzar la organización del sindicato. El comité abrió espacio para que los trabajadores se reunieron y discutieron los problemas aparte de sus reuniones trimestrales con los gerentes. Las trabajadoras lo consideran un paso importante hacia su autoadministración. Se abrieron oportunidades de fomentar la solidaridad y desarrollar estrategias para superar obstáculos como las brechas salariales entre trabajadoras.

“Diría que el personaje [del sindicato] es pequeño, terco y feminista,” dijo Julianna Smith. “Somos un grupo pequeño pero tenemos la participación de la mayoría de las trabajadoras en las reuniones y votaciones.”



153 periodistas mexicanos asesinados desde 2000

viene de la página 6

trabajando para Cadena Noticias entre otros. Lourdes Maldonado Lopez también trabajó en Tijuana para el Primer Sistema de Noticias (PSN), entre otros medios. Fue asesinado en la calzada de su casa en Tijuana el 23 de enero de 2022. Ella acababa de ganar un juicio en contra de su ex-jefe Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California (2018-2021) quien también es propietario de los medios.

El primero asesinato de 2022, el 10 de enero, fue el director de Inforegio, un servicio de noticias online, Jose Luis Gamboa Arenas, quien falleció en el hospital debido a las heridas recibidas. Hasta la fecha, nadie ha sido condenado por ninguno de los asesinatos de los periodistas en 2022.

La libertad de la prensa en México sigue en un

estado de crisis a causa de esta ola de asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios. Más de 153 periodistas han perdido la vida en México desde 2000, según Reporteros sin fronteras.

“¿Cuántos asesinatos y familias destrozadas serán necesarios para que el Gobierno mexicano haga de la protección de los periodistas y de la lucha contra la impunidad de estos crímenes una prioridad?”

“Las autoridades federales, y de Sinaloa y Veracruz deben, por su parte, identificar a la mayor brevedad a todos los responsables de estas cobardes ejecuciones, así como priorizar la causa profesional en sus investigaciones,” dijo Emmanuel Colombié, el director de la Oficina de América Latina de RSF.



12 periodistas mexicanos asesinados en 5 meses de 2022

MÉXICO—La libertad de la prensa en México está bajo asedio por elementos corruptos y violentos en 2022.

Hasta la fecha, en este año, 12 ya han muerto. El año anterior 10 periodistas y trabajadores de los medios mexicanos murieron en actos violentos vinculados a su trabajo. Todavía quedan seis meses en 2022.

Una característica común de los periodistas asesinados es que la mayoría son periodistas independientes investigando la corrupción y a los narcotraficantes en sus comunidades.

En mayo, en menos de una semana, murieron tres periodistas Mexicanos: Luis Enrique Ramirez (El Debate), Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana Garcia Olivera (El Veraz). Ramírez era un periodista de televisión – fue asesinado el 5 de mayo en Sinaloa. Mollinedo y García, quienes trabajaron por El Veraz, una fuente independiente de noticias, fueron asesinados a tiros en Veracruz el 9 de mayo.

Sus asesinatos ocurrieron días después del 3 de mayo de 2022, el vigésimo noveno Día Mundial de la Libertad de Prensa de las Naciones Unidas.

“Press Emblem Campaign (PEC) está consternada por el asesinato de tres periodistas más en cinco días en México,” dijo la organización no gubernamental, basado en Ginebra.

Los asesinatos están ocurriendo en los estados de México que tienen un alto nivel de actividad de narcotraficantes y corrupción local.

Heber López Vásquez Salina Cruz, 39, era el director de RCP Noticias en Oaxaca. Le dispararon



Foto: Fundación Knight

Manifestante exigiendo el fin de violencia contra periodistas en México en el Distrito Federal de México el 7 de agosto 2010.

“¿Cuántos asesinatos y familias destrozadas serán necesarios para que el Gobierno mexicano haga de la protección de los periodistas y de la lucha contra la impunidad de estos crímenes una prioridad?”

**— Emmanuel Colombié,
Reporteros sin fronteras**

fuera de su casa el 10 de febrero. Jorge Luis Camero Zazueta del Informativo murió en Sonora el 24 de febrero.

Juan Carlos Muñoz del Testigo Minero, murió el 4 de marzo en Zacatecas. Armando Linares López trabajó para el Monitor Michoacán. Murió el 15 de marzo en Zitácuaro. Seis semanas antes, su colega del mismo medio, Roberto Toledo, 55, fue asesinado en Zitácuaro.

El fotógrafo de noticias, Margarito Martínez, murió en Tijuana el 17 de enero, últimamente

continúa en la página 5